

CÓMO SE PERDIÓ LA REPÚBLICA*

La creencia de que la Guerra Civil española puede ser reducida en esencia a una lucha entre democracia y fascismo, o entre fascismo y comunismo, recibe un saludable correctivo ya en la segunda página de la excelente historia de España en la década de 1930 realizada por Julián Casanova. Aunque a escala internacional puede ser considerado como uno más de los conflictos de décadas de «guerra civil europea» que finalizaron en 1945, el autor insiste correctamente en que la guerra española, iniciada por un golpe militar contra el gobierno democráticamente elegido, fue una guerra de muchas guerras, algunas de ellas con largas historias: una guerra para resolver profundos conflictos sociales, precipitada desde la compleja química del primer régimen verdaderamente democrático de la historia de España; una guerra de lucha de clases; una guerra de religión, entre el oscurantismo y la modernización; una guerra ideológica alrededor de los conceptos de nación y patria; una guerra entre creencias políticas antagonistas, librada «en un contexto internacional que había quedado desequilibrado por la crisis de las democracias y la arremetida del comunismo y del fascismo». Como observa Casanova, la suerte de España no fue muy diferente a la de más de la mitad de las veintiocho democracias parlamentarias o cuasi parlamentarias que existían en los años de entreguerras, y que a principios de 1939 habían sucumbido a regímenes dictatoriales.

En 1930 España era todavía un país predominantemente agrario, aunque la clase obrera industrial había doblado su tamaño desde el cambio del siglo, debido en gran parte a las ventajas económicas que proporcionó la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial y al *boom* de la década de 1920. Pero el país estaba marcado por un desarrollo socioeconómico extremadamente desigual. La industria estaba confinada casi exclusivamente en el norte y noreste, en el País Vasco y en Cataluña; en el sur, unos cuantos miles de propietarios poseían los dos tercios de las tierras, mientras que 750.000 jornaleros sin tierra se ganaban la vida a duras penas vi-

* Julián Casanova, *The Spanish Republic and Civil War*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 358 pp. [ed. original castellana: *Historia de España, vol. VIII. República y Guerra Civil*, Barcelona Crítica, 2007].

viendo de salarios de hambre. Estas grandes fincas del sur del país contrastaban a su vez con los pequeños agricultores del norte y noroeste, que trabajaban parcelas demasiado pequeñas para proporcionar algo más que los medios de subsistencia. Una clase obrera combativa estaba repartida entre anarquistas y socialistas, dividida por la cuestión del Estado y de la participación del movimiento obrero en la política. Ambos, junto al republicanismo, fueron productos de la segunda mitad del siglo XIX, precediendo el anarquismo al socialismo. El primero era especialmente fuerte entre los trabajadores industriales de Barcelona, donde el sindicato anarquista CNT (Confederación Nacional del Trabajo) afirmaba tener 400.000 militantes en 1931, y entre el proletariado rural andaluz en el otro extremo geográfico. Incluso el nivel cultural era una muestra del desigual desarrollo del país: por un lado, un índice de analfabetismo cercano al 50 por 100 de la población de más de diez años; por otro, un grupo de deslumbrantes poetas, novelistas y dramaturgos que conducían al país a un renacimiento literario.

La República fue proclamada prácticamente sin derramamiento de sangre el 14 de abril de 1931, dos días después de que la monarquía se desplomara de la noche a la mañana como resultado de las victorias republicanas en las principales ciudades en las elecciones municipales. El rey pagó el precio de haber apoyado a la dictadura militar del general Primo de Rivera, desde 1923 —cuando bajo el encantamiento de la Revolución bolchevique, las movilizaciones de la clase obrera industrial y agraria asustaron a las clases dominantes de la monarquía— hasta su colapso en 1930. Las elecciones habían sido concebidas como un sondeo para examinar el sentimiento público sobre el regreso al anterior régimen parlamentario manipulado por la monarquía; para sorpresa general, el vendaval que se desató se llevó por delante al rey y al orden pseudodemocrático. Los sentimientos populares antimonárquicos habían sido movilizados al máximo por un «comité revolucionario» creado por toda la gama de dirigentes de partidos republicanos, reunidos en San Sebastián el verano anterior, al que después de una vacilación inicial se había unido el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La sumaria ejecución de dos oficiales de rango medio, que se habían alzado en armas, sin duda contribuyó a aumentar los sentimientos antimonárquicos. No obstante, la República llegó, por así decirlo, de la nada, sin luchas de masas y sin que se hubiera formado una sólida base republicana; desconcertadas, no sabiendo qué tocar, algunas bandas de música de pueblos y ciudades arrancaron con la *Marseillaise* en la celebración del advenimiento de la República.

Los cinco años de existencia de la República previos a la guerra se dividen de manera natural en tres periodos: el bienio republicano-socialista de 1931-1933 que promulgó reformas radicales; un segundo bienio de gobierno de centroderecha y contrarreforma, de 1933-1935; y el periodo final, cinco meses de exclusivo gobierno de la izquierda republicana que duró hasta el levantamiento militar de mediados de julio de 1936. Es mérito de Casanova estudiar la República con detalle —ocupa una tercera parte del libro— en vez de tratarla simplemente como un preámbulo de la

Guerra Civil, al mismo tiempo que no pierde de vista acontecimientos comparables acaecidos en otras potencias europeas del periodo de entre-guerras. Casanova señala que nada en los orígenes de la República presagiaba su fatal desenlace, ya que el criterio necesario para la estabilidad, «el que una amplia mayoría de la población aceptara, o por lo menos tolerara, una democracia introducida con tanta rapidez», parecía cumplirse inicialmente, ya fuera sostenido por la esperanza o aturrido por el remolino de acontecimientos. Las Cortes Constituyentes, que tras las elecciones generales de junio de 1931 tenían una aplastante mayoría republicana, no manifestaron una radicalización de la vida política española; no había fascistas, ni comunistas, ni anarcosindicalistas. Sin embargo, la derecha no republicana era una oposición tan minúscula, que poco o nada podía hacer a la hora de elaborar la Constitución, todavía menos para representar «las opiniones de grandes sectores de la sociedad española», que poseían, Casanova insiste, «un fuerte poder económico, social y cultural». Siguiendo una tradición que se remonta a la primera Constitución moderna española de 1812, la coalición elaboró una Constitución que en vez de proporcionar un campo de juego parlamentario neutral para la pacífica contienda por el poder, era «una carta programática de lo que los republicanos, ya en el poder, creían necesario para modernizar España».

Junto al genuino sufragio universal y a un gabinete responsable ante un parlamento unicameral, llegaron las reformas religiosas «marcadamente anticlericales» de la Constitución: libertad de religión; separación de la Iglesia y el Estado; fin de las escuelas dirigidas por la Iglesia y secularización de toda la educación; abolición de los estipendios del Estado para los curas; disolución de los jesuitas y la introducción del matrimonio, el divorcio y el entierro civil. Algunas de estas medidas eran controvertidas incluso para algunos republicanos: el primer ministro y el ministro del Interior, ambos católicos practicantes, emitieron un voto negativo y dimitieron de inmediato. Como señala Casanova, la lucha entre el clericalismo y el anticlericalismo «fue más intensa en España que en cualquier otro país europeo de la época».

En la década de 1930, la manifestación pública del anticlericalismo español y de la violencia popular que en no pocas ocasiones lo acompañó ya se remontaban a casi un siglo. Se trataba, por una parte, de un fenómeno sociocultural irreducible a una causalidad simplista, aunque sus raíces sin duda se encontraban profundamente ancladas en el pasado: en el poder económico e ideológico de la Iglesia durante el *ancien régime* y en su infatigable defensa de la verdadera fe, cuando ella —o más correctamente, la Inquisición— elevó la intolerancia y la intransigencia a los altares de la santidad. Por otra, el aspecto *político* del anticlericalismo español se puede datar con más precisión porque coincide con las revoluciones liberales de principios del siglo XIX, que intentaban desechar todos los vestigios del Viejo Orden, y con ellos especialmente el poder del clero sobre la sociedad. La primera masacre de clérigos y las primeras quemaduras de iglesias se produjeron en Madrid en 1835, provocadas por los rumores de

que los frailes habían desatado una epidemia de cólera envenenando el agua potable. Un siglo más tarde, la Iglesia todavía no había aceptado la modernización y la secularización; estaba acostumbrada a educar a los hijos de los privilegiados y a ignorar a los de las clases populares; a proporcionar asistencia a los desfavorecidos dóciles; a fomentar sindicatos amarillos y alinearse con los patronos en contra de los obreros «rebeldes», y a ofrecer a los pobres consuelo para la próxima vida, ya que no para esta. La clase obrera, cada vez más organizada sindicalmente, se enfrentaba a la Iglesia con la enemistad reservada para el enemigo de clase, mientras que los profesionales de las clases medias progresistas –esencialmente metropolitanas– la contemplaban como un poder hostil para la modernización del país y esperaban una legislación que la sometiera. Unos y otros pasaron por alto el hecho de que las clases dominantes habían patrocinado durante siglos una religión compartida como medio de imponer su hegemonía ideológica, y no era probable que renunciaran a ella fácilmente. De esta manera, como señala Casanova, había tres Españas: una extremadamente católica, antisocialista y respetuosa de la ley, otra moderadamente católica, y una tercera marcadamente anticlerical, una España «con mayor presencia del catolicismo en el norte que en el sur, entre los propietarios de tierras que entre los desposeídos, entre las mujeres que entre los hombres [...]».

Además, pronto se hizo evidente que la política religiosa de la coalición iba a proporcionar un terreno fértil para que la oposición reclutara y reagrupara fuerzas en su defensa de la religión, del orden público, de la propiedad y de la familia, como así sucedió con la formación del partido de masas católico, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas). Las medidas religiosas –pocas de las cuales llegaron a imponerse porque la coalición se desplomó antes de que entraran en vigor– tuvieron a pesar de todo un dramático impacto sobre los devotos católicos, ya alarmados antes de que la República hubiera cumplido un mes de vida por el estallido de incendios anticlericales en respuesta a una insignificante provocación de las juventudes monárquicas. Como señala adecuadamente el autor, los fundadores de la República nunca se tomaron suficientemente en serio la reacción católica; la quema de iglesias en Madrid y Málaga, que el gobierno no detuvo con suficiente celeridad, quedó vívidamente impresa en la mente de los católicos.

La «amplia coalición estabilizadora», que para Casanova era esencial para la consolidación de la República, recibió un duro golpe seis meses después de la proclamación del régimen, cuando Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, el mayor y más antiguo de los partidos republicanos, se desplazó hacia la derecha y se pasó a la oposición; otro golpe traidor fue la negativa pública de la CEDA a reconocer su lealtad a la República; y por último se produjo un prematuro levantamiento militar en Sevilla en 1932, aunque fue fácilmente abortado. A esto hay que añadir el desgaste provocado por la «gimnasia revolucionaria» de los anarquistas: tres insurrecciones en dos años que fueron reprimidas por el gobierno.

El único éxito indudable de la coalición fue su programa de construcción de escuelas para reemplazar los centros de la Iglesia y para reducir el elevado índice de analfabetismo: en 1934 se habían construido más de 10.000 escuelas. Sin embargo, otras medidas, especialmente una reforma agraria infradotada y la reforma militar de Manuel Azaña, tuvieron mucho menos éxito. No se hizo ningún progreso para paliar el desempleo, que alcanzó su nivel más alto en 1933, el peor año de la Gran Depresión en España; se concedió la autonomía a Cataluña, pero no al País Vasco; y lo más grave de todo, después de dos años en el poder, la coalición se rompió. Esto abrió el camino para la rotunda victoria de la CEDA en las elecciones generales de noviembre de 1933, con el Partido Radical en segunda posición. La CEDA inicialmente prestó apoyo parlamentario al gobierno de Lerroux, aunque José María Gil Robles, un astuto abogado y dirigente de la CEDA, pronto hizo pública su estrategia. Primero colaborar con el nuevo gobierno, después participar en él, y por último apoderarse del mismo con la intención de revisar la Constitución. Si esto resultaba imposible, habría que encontrar «otros medios», evidentemente extraparlamentarios y no democráticos. Mientras tanto, el gobierno encabezado por los radicales, bajo presión de la CEDA, revirtió la reforma religiosa, consiguió la práctica paralización de la reforma agraria, y rebajó los salarios agrícolas en lo que la izquierda llamó el «bienio negro».

En medio de una creciente polarización, el Partido Socialista comenzaba a hablar de una insurrección armada contra cualquier participación de la CEDA en el gobierno, rompiendo con su posición anterior a favor de la legalidad republicana y de la democracia parlamentaria como medio pacífico para alcanzar el socialismo. Los acontecimientos registrados en el ámbito doméstico –las diatribas de Gil Robles en contra de la democracia y a favor de un «concepto totalitario del Estado», la aparición de la todavía minúscula Falange, así como las inclinaciones fascistas del movimiento juvenil de la CEDA– y la evolución del panorama internacional –el ascenso de Hitler al poder y el aplastamiento de los socialistas austriacos a manos del canciller Dollfuss– despertaron en la izquierda la alarma sobre el fascismo nacional e internacional. En octubre de 1934 tres miembros de la CEDA se unieron al gobierno y entonces comenzó la poco preparada insurrección socialista, que arraigó brevemente en Cataluña y con más fuerza en Asturias, donde una coalición de socialistas, anarcosindicalistas y militantes comunistas resistió durante dos semanas en un intento genuino de revolución social. Por primera vez en un siglo también se desató el anticlericalismo de manera criminal: fueron asesinados treinta y cuatro curas, seminaristas y frailes y se incendió o reventó un gran número de iglesias. A instancias del general Franco, se recurrió a unidades de la Legión y de tropas marroquíes (los Regulares), así como a 15.000 soldados y 3.000 efectivos de la paramilitar Guardia Civil para reprimir el levantamiento, lo cual hicieron con extrema brutalidad, realizando ejecuciones sumarias bajo la ley marcial. El coste final fue de alrededor de 1.100 muertos, 2.000 heridos e incontables insurrectos encarcelados, además de 300 bajas entre las tropas militares y paramilitares del otro bando.

Casanova destaca que el «octubre rojo» no fue la batalla de inicio de la Guerra Civil, como algunas veces se afirma, o el final de la coexistencia constitucional. Tan solo dieciséis meses después se celebraron elecciones generales dentro del proceso republicano-democrático legal, aunque la CEDA se despojó de cualquier intención de estabilizar a la República. En mayo de 1935, Gil Robles —entonces ministro de la Guerra en un gobierno dominado por la CEDA— nombró al general Franco jefe del Estado Mayor, y reforzó los elementos derechistas de los escalones superiores del ejército; todos ellos desempeñarían un papel significativo en el levantamiento militar de 1936.

En febrero de 1936 se celebraron las elecciones generales. La izquierda estableció un amplia alianza en el Frente Popular, formado por los partidos republicanos de izquierda, el PSOE, la organización de las juventudes socialistas y el bloque sindical, Unión General de Trabajadores (UGT), el Partido Comunista de España (PCE) y los disidentes comunistas agrupados en el recientemente formado POUM. La derecha, por otro lado, estaba más dividida que en 1933. El electorado otorgó al Frente Popular la victoria por un pequeño margen; pero la negativa de Largo Caballero, secretario general de la UGT, a volver a la coalición del primer bienio en la que había sido ministro de Trabajo, llevó a que solamente los partidos republicanos de izquierda estuvieran presentes en el gobierno que encabezó Manuel Azaña. Cuando este último fue elevado a la presidencia de la República en mayo y trató de restaurar la coalición republicano-socialista con Indalecio Prieto, líder socialista vasco cuya facción «centrista» controlaba el comité nacional del PSOE, Largo Caballero amenazó con romper el pacto del Frente Popular. En lugar de Prieto, Santiago Casares, republicano de izquierda, fue nombrado jefe de gobierno y ministro de la Guerra.

A menudo se acusa a la «debilidad de su gobierno» del fracaso para frustrar la conspiración militar, pero Casanova mantiene que esto es subestimar el claro cisma que se había producido en el PSOE y que impedía cualquier esperanza de fortalecer el gobierno. Considera al propio Prieto como parcialmente culpable: no solamente había estado activamente implicado en el levantamiento de Asturias, sino que se había embarcado en el proceso de remplazar a Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, sin haber asegurado su alternativa política para encabezar el gobierno. El propio Alcalá Zamora había tenido su propia aportación a la desestabilización de la República «entrometiéndose excesivamente» en el proceso democrático: primero intentando infructuosamente destituir a Azaña con motivo de la tramitación del proyecto de Ley de Congregaciones Religiosas en mayo de 1933, para lograrlo cuatro meses después, el día siguiente en que Azaña obtenía la confianza de las Cortes, para nombrar jefe de gobierno a Lerroux. A partir de entonces, Alcalá Zamora impidió el acceso de Gil Robles de la jefatura del gobierno durante el segundo bienio; finalmente, utilizando los mecanismos del poder presidencial, formó un partido centrista para presentarse a las elecciones de febrero de

1936, que cosechó un rotundo fracaso electoral. Pero su sustitución por Azaña no supuso el éxito que este último esperaba, ya que debilitó al gobierno republicano de izquierda, muy necesitado de sus personales habilidades políticas como jefe de gobierno en el momento de máximo peligro para la democracia española.

Consternada por su inesperada derrota electoral, la CEDA dio un significativo giro hacia el autoritarismo. Casanova dice que «todo el mundo entendió el mensaje», la necesidad de «abandonar las urnas y tomar las armas». Mientras tanto, el movimiento juvenil del partido estaba desertando *en masa* hacia la Falange, cuyos miembros se dedicaron a una desestabilizadora violencia callejera en Madrid —que se sumaba al incremento diario de la violencia verbal— con intentos de asesinato de personalidades destacadas y choques armados, a lo que las juventudes socialistas, inclinadas a crear milicias, respondieron de la misma manera. Rebatiendo la afirmación de Stanley Payne de que las huelgas en las zonas dominadas por la CNT estaban en su apogeo histórico, Casanova sostiene adecuadamente que en los principales bastiones sindicales de Barcelona, Zaragoza y Sevilla, la CNT estaba relativamente inactiva. Más bien fue la masiva invasión de tierras en Badajoz, dirigida por los socialistas, y que se apropió de una extensión de tierra siete veces mayor que la conseguida en toda la reforma agraria anterior, lo que asustó a las clases dominantes y las llevó a pensar que el gobierno había perdido el control de la situación.

Inmediatamente después de la victoria electoral del Frente Popular, los oficiales de derechas del ejército comenzaron a conspirar activamente. El gobierno alejó a muchos de ellos de Madrid: envió al general Franco a Canarias y al general Mola, el clandestino «director» del planeado alzamiento, a Pamplona. El 25 de mayo Mola lanzó la primera «instrucción confidencial» para los conspiradores en la que proclamaba la necesidad de la represión violenta para asegurar el triunfo del golpe. Los militares rebeldes lo tomaron al pie de la letra. El asesinato a primeras horas de la mañana del 13 de julio de José Calvo Sotelo, en aquél momento el líder más destacado de la derecha —realizado por fuerzas de seguridad en venganza por el asesinato de uno de sus miembros en los días anteriores— finalmente empujó a los militares indecisos. Aunque el gobierno no había tomado parte en el asesinato de Calvo Sotelo, fue ampliamente culpabilizado por los conservadores, que el 17 de julio se unieron a la sublevación militar que había comenzado en Marruecos y que en los tres días siguientes se extendía a la Península.

La confianza en una veloz victoria de los sublevados se disipó rápidamente cuando la insurrección en las principales ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona, fue aplastada en las calles por una combinación de fuerzas de seguridad leales y de militantes políticos y sindicales. Donde esta combinación no se produjo, o donde las fuerzas de seguridad se unieron a los sublevados, el alzamiento tuvo un éxito inmediato, como sucedió en Sevilla y Zaragoza. El hecho de que menos de la mitad del

ejército y de las fuerzas de seguridad se unieran a la insurrección fue la principal razón para que el golpe fracasara en su objetivo principal y se transformara en una guerra civil. El alzamiento fracturó a la República pero no la derribó: el núcleo del campesinado católico en el norte, excepto la costa cantábrica, cayó en poder de los rebeldes; lo mismo sucedió en el sur con la Andalucía latifundista y parte de Extremadura. La República mantuvo cinco de las principales ciudades españolas, el grueso de su industria y las masivas reservas de oro del Banco de España; los militares solo se habían apoderado de una gran parte de los graneros del país. Parecía que la República debía ganar la guerra.

El que no lo hiciera es la cuestión que subyace en los cinco capítulos que Casanova dedica específicamente a la guerra. Pero antes reconstruye la escena de los primeros días del conflicto. El error inicial del nuevo gobierno, que seguía siendo totalmente republicano, fue ordenar la desmovilización del ejército con la esperanza de reducir los recursos humanos de los sublevados; en vez de ello, esto condujo a la desbandada de sus propios soldados, muchos de los cuales se unieron a las milicias que los sindicatos y militantes políticos antimilitaristas estaban creando en lugar de un ejército. No obstante, el gobierno ordenó armar al pueblo, aunque ya muchos se habían apoderado de armas en los cuarteles y depósitos donde habían derrotado a los militares. Una fragmentada revolución desde abajo, que desembocó en una multitud de comités que dirigían los asuntos locales, debilitó al Estado y le privó de su poder coercitivo final, las fuerzas armadas, después de lo cual expiró. En persecución del enemigo, la revolución marchó sobre su inanimado cuerpo sin detenerse a insuflar nueva vida en él. Por parte de los sublevados, el general Franco, que había volado desde Canarias, tomó el mando en Marruecos e hizo un llamamiento de ayuda a Alemania e Italia. Ambos países rápidamente contestaron enviando aviones de transporte para trasladar hasta Sevilla al único ejército profesional español, el Ejército de África. Una columna formada por legionarios y tropas marroquíes empezó a avanzar rápidamente hacia el norte en dirección a Madrid.

El primer capítulo específico sobre la guerra nos sumerge en el horror de los asesinatos en la retaguardia de ambos bandos. Los primeros en ser fusilados fueron los oficiales del ejército, ya fuera por haberse negado a sublevarse —bajo la ley marcial los sublevados arrogantemente calificaron a los oficiales leales a la República de «rebeldes»— o, en el otro bando, como traidores por haberlo hecho. Tras ellos, para el bando de los sublevados llegó el turno de dirigentes republicanos, líderes y miembros de la CNT y de la UGT, militantes de partidos de izquierda, conocidos defensores del Frente Popular, masones, maestros republicanos, funcionarios civiles, profesionales e intelectuales. Todas «las ratas», toda «la escoria roja», tenía que ser «quirúrgicamente eliminada» para salvar la patria y la «civilización cristiana» y para asegurar la pacificación de la retaguardia, lo que provocó la muerte de cerca de 100.000 personas, según las meticulosas investigaciones realizadas en los últimos años. Por su parte, los republicanos

eliminaron a unas 55.000 personas, de las cuales 6.832 fueron miembros regulares o seculares del clero y 280 mujeres de órdenes religiosas. A continuación vinieron aquellos considerados los «opresores» del pueblo: católicos destacados, dirigentes y militantes de partidos de derechas, propietarios de empresas y patronos y pistoleros de sindicatos amarillos.

El autor, un experto en la materia, dice que la represión utilizó en ambas zonas el mismo idioma deshumanizador, la necesidad de «higiene pública» para limpiar al país de su enemigo. Con la excepción de la masacre organizada de aproximadamente 2.000 prisioneros políticos durante la defensa de Madrid, la más numerosa en ambos bandos, el peor aluvión de asesinatos en tiempo de guerra en ambas zonas se produjo en los tres primeros meses. Incluso así, hubo una diferencia significativa: muchas voces, que no se escucharon en el bando sublevado, sí se levantaron en la zona republicana en contra de las matanzas; a principios de septiembre un nuevo gobierno dirigido por Largo Caballero empezó a crear una apariencia de orden público que lentamente pusiera fin a los asesinatos. Pero no con suficiente rapidez. Las noticias de la violencia anticlerical que incluía el desenterramiento de féretros de monjas, la extendida quema de iglesias y la profanación de objetos religiosos, se difundió por todo el mundo creando una imagen extremadamente negativa de la zona republicana. En el lado rebelde, con alguna excepción ocasional, una férrea censura mantuvo los asesinatos fuera de las noticias. La Iglesia, que pronto santificaría la guerra de los sublevados como una «cruzada religiosa», cerró los ojos, aunque cientos de miembros del clero fueron testigo de la represión, llevada a cabo no solo por los militares, sino por falangistas y ciudadanos católicos conservadores normalmente respetuosos con la ley.

El lector acaba con considerable alivio las páginas de estos horribles acontecimientos y se dirige hacia la situación internacional, cuyos perfiles son bien conocidos: la completa «farsa» de la no-intervención, como la califica Casanova, celosamente promovida por una Gran Bretaña en las garras de la contemporización, y por el Frente Popular francés, de quien partió la idea, y que no fue respetada con el mismo celo por las potencias fascistas que apoyaban a Franco. En un momento de extendido rearme europeo, «ningún país mostró interés por detener la guerra española».

Sin la ayuda fascista, la mayor parte proporcionada a crédito, los sublevados no hubieran podido continuar la guerra durante mucho tiempo, menos aún ganarla. Aparte de la Legión Cóndor, Alemania e Italia proporcionaron en conjunto decenas de miles de soldados (principalmente italianos), cerca de 1.600 aviones, miles de vehículos blindados y cientos de piezas de artillería. Igualmente importantes fueron los 3,5 millones de toneladas de combustible proporcionadas a crédito por Texaco y Shell —el doble de la cantidad importada por la República— sin las cuales el ejército de Franco no hubiera podido maniobrar tan rápidamente como lo hizo. Stalin, que no quería provocar a Francia y a Gran Bretaña, porque todavía buscaba una alianza antifascista con ellas, se mantuvo inicialmente al

margen, pero la descarada intervención nazi y fascista le alarmó cada vez más. Asegurándose de que todas las potencias europeas fueran conscientes de que la ayuda soviética para la República no pretendía hacer progresar la revolución, en octubre de 1936 llegó a Madrid la primera remesa de armas soviéticas –junto al primer contingente de las Brigadas Internacionales– justo a tiempo para ayudar a impedir la caída de la capital. En total, la Unión Soviética envió 700 aviones militares y 400 vehículos blindados, además de 2.000 pilotos, ingenieros, consejeros militares y miembros de la NKVD, la policía secreta. El número total de brigadistas que pelearon en un u otro momento fue de 35.000, pero nunca hubo más de 20.000 en el campo de batalla.

Casanova dice que «la República se gastó tanto dinero en perder la guerra como los franquistas en ganarla»: alrededor de 600 millones de dólares (de 1939) cada uno. El esfuerzo bélico de la República no hubiera podido mantenerse demasiado sin las reservas de oro del Banco de España, entre las mayores del mundo y valoradas en 805 millones de dólares. Hacia la Unión Soviética se embarcó oro por valor de 518 millones que se gastó en armas y suministros. El Banco de Francia también se hizo con oro por valor de 195 millones de dólares. Sin embargo, la igualdad de gastos de ambas partes es engañosa. Franco recibió no solo más armas, sino de una calidad incalculablemente mayor; la República, incapaz de obtener legalmente armamento de las democracias, se vio obligada a menudo a utilizar intermediarios y traficantes. Aparte de las constantes estafas, el autor dice que «la mala calidad del armamento y los sobornos le costaron al gobierno quizá 100 millones de dólares». El dinero prácticamente se agotó en agosto de 1938, y la Unión Soviética proporcionó un crédito de 60 millones de dólares para permitir que la República continuara la guerra.

El 4 de septiembre de 1936, con las milicias revolucionarias incapaces de contener el avance sobre Madrid del Ejército de África, Largo Caballero se convirtió en jefe del gobierno y ministro de Defensa, y su gabinete incluyó a dos ministros del Partido Comunista, siendo el primer gobierno de Europa occidental en hacerlo. Las principales tareas del gobierno fueron supervisar la reconstrucción del Estado, la militarización de las milicias, la contención de la revolución –y con ella el fin de la violencia en la retaguardia– y la centralización del poder. El gobierno, al que en poco tiempo se unieron dos ministros anarquistas, avanzó en todos los frentes menos en uno: el éxito militar. Ni siquiera puede reclamar la exitosa defensa de Madrid, ya que salió en secreto de la capital –abandonándola a su suerte a ojos del pueblo– en vísperas de la ofensiva de Franco. La caída de Málaga, con una caótica defensa de las milicias frente a fuerzas italianas y españolas en febrero de 1937, abrió una caja de Pandora política que fue precintada de nuevo –sellando en el proceso la suerte de Largo Caballero– con el derramamiento de sangre en las calles de Barcelona cuando militantes anarquistas y del POUM pelearon en defensa de la revolución contra las fuerzas socialistas y comunistas, que defendían un compromiso exclusivo con la guerra.

Diez meses antes, al comienzo del conflicto, el movimiento anarquista se había dado cuenta de que no era el momento de la revolución, solo importaba la derrota del enemigo. Pero la insurrección militar precipitó la misma revolución que había intentado prevenir y ante el consiguiente vacío de poder no hubo nada que detuviera su propagación. Las fábricas y empresas fueron colectivizadas o puestas bajo el control de los obreros, mientras que más de la mitad de las 5.500.000 hectáreas de tierra cultivable expropiadas en agosto de 1938 eran trabajadas legalmente por colectivos de la CNT y la UGT. Pero bajo el fermento revolucionario se libraba una lucha por el poder y por el control de las escasas armas. Ese fue el verdadero significado de la lucha en Barcelona: la creciente influencia del Partido Comunista en el ejército y en la vida política y el aumento de sus militantes debido principalmente a la ayuda soviética. La intervención directa del gobierno finalmente detuvo la pelea en las calles y poco después acabó con la revolución.

El beneficiario inmediato de la crisis fue Juan Negrín, un fisiólogo socialista de 45 años, políglota y experto reconocido en asuntos financieros —como ministro de Hacienda organizó el envío de oro a Moscú— a quien el presidente Azaña nombró jefe del gobierno para poner fin a la indisciplina y «desorganización» en la retaguardia, especialmente en Cataluña y Aragón. El gobierno tomó las riendas del orden público en Cataluña, disolvió el Consejo de Aragón dominado por los anarquistas y envió a la división comunista de Enrique Lister para romper las colectividades rurales aragonesas. Más fácil de despachar, el POUM —«provocadores trotskistas» y «espías fascistas», como proclamaba el Partido Comunista— fue declarado fuera de la ley, sus milicias desmanteladas y su líder, Andreu Nin, uno de los antiguos secretarios de Trotski, «desapareció»; de hecho fue secuestrado y asesinado por el NKVD. El asunto profundizó aún más la desconfianza entre los comunistas y el resto de las organizaciones políticas, especialmente anarquistas y socialistas de izquierda, y también dejó claro los graves problemas que estaban produciendo en la República las disputas políticas internas, siendo un considerable escollo para ganar la guerra. En el otro lado del frente no había semejante problema: Franco, para entonces cabeza del así llamado Estado nacional, aplastó la disidencia de raíz, uniendo por la fuerza a falangistas y carlistas, las únicas organizaciones políticas civiles autorizadas.

En palabras del autor, la política de guerra de Negrín fue «un desesperado intento para introducir una alternativa democrática y disciplinada [a la revolución] que ocasionara un cambio en la política británica y francesa». En pocas palabras, seguir luchando hasta que Gran Bretaña y Francia suspendieran su agobiante política de no intervención, o si eso fracasaba, vincular la guerra española a la cada vez más inminente guerra europea. En octubre de 1937 todo el norte republicano, con la industria pesada del País Vasco, había caído en manos del enemigo, inclinando el equilibrio del poder a favor de Franco. La breve reconquista republicana de Teruel en el amargo invierno de 1937-1938, y su nueva pérdida, condujo inme-

diatamente a que Franco recuperara la ofensiva en Aragón, que cayó en solo tres semanas, asegurando un punto de apoyo en el oeste de Cataluña. A mediados de abril de 1938 su ejército alcanzó el Mediterráneo en Vinaroz, dividiendo en dos a la República. A partir de marzo de 1937, y después de sus repetidos fracasos para tomar Madrid, la estrategia de Franco fue librar una guerra de desgaste, una «ocupación sistemática del territorio acompañada por una necesaria operación de limpieza» –claro eufemismo para la represión– que el Generalísimo declaró «preferible a una rápida derrota de los ejércitos del enemigo que dejaría el país infestado de adversarios».

En la primavera y principios de verano de 1938, cuando su ofensiva diplomática fracasó en alcanzar un acuerdo negociado para el fin de la guerra, Negrín lanzó su última apuesta militar: la ofensiva del Ebro, que empezó en las últimas semanas de julio de 1938. Su objetivo, de acuerdo con Casanova, no era derrotar al enemigo, una tarea imposible, sino negociar desde una posición de fuerza una «rendición algo menos que incondicional» abriendo un corredor en territorio enemigo para aliviar Valencia y restaurar la comunicación directa entre las dos zonas republicanas. De una forma más dramática, la ofensiva del Ebro siguió inicialmente el modelo de las anteriores batallas más importantes de la República: Brunete, Belchite, Teruel. En primer lugar, el ataque, un atrevido paso del Ebro por la noche, que tomó al enemigo por sorpresa, seguido por un corto avance antes de ser detenidos por los refuerzos que Franco envió rápidamente al frente. Sin embargo, esta vez las tropas republicanas –la mayoría dirigidas por los comunistas– recibieron la orden de resistir en sus posiciones, y así se mantuvieron durante casi cuatro meses, expuestas al fuego de la artillería y a los ataques de la infantería, hasta que los supervivientes recibieron a mediados de noviembre la orden de retirada, cruzando de nuevo el Ebro. No se ganó otra cosa que tiempo a costa de un gran sacrificio: 60.000 soldados curtidos en la lucha entre muertos y heridos y una considerable pérdida de material de guerra. Incluso el tiempo corría en contra de la República. A finales de septiembre, el Pacto de Múnich que firmaban Gran Bretaña y Francia ponía a Checoslovaquia –la única democracia que quedaba en el centro y el este de Europa– en manos de Hitler, evidenciando sin el menor asomo de duda la continua negativa de las democracias para ayudar a la República española. Entre las navidades y el 4 de febrero se perdió Cataluña; Barcelona cayó sin resistencia en medio de un masivo éxodo de civiles a Francia.

Para el que supiera leerlo el futuro ya estaba escrito. Medio muertos de frío y hambre en Madrid, alimentándose de 100 gramos de pan y lentejas, las llamadas popularmente píldoras del Dr. Negrín, acosados por una quinta columna y descorazonados pero no vencidos por las constantes derrotas del ejército, los verdaderos creyentes conservaban la fe; pero cada vez eran menos. Los republicanos no comunistas tenían miedo de una dictadura al estilo soviético si la guerra continuaba. Para culminar todas las disputas políticas anteriores, la guerra terminó como había empezado, con un

golpe militar, dirigido por el coronel Casado, comandante del Ejército del Centro republicano de Madrid, contra el gobierno de Negrín a principios de marzo de 1939. Los militares habían perdido la fe en el reiterado llamamiento del jefe del gobierno para continuar la resistencia. El golpe se convirtió en una guerra civil en las calles de la capital entre tropas dirigidas por los comunistas que trataban de aplastar a Casado –quien pensaba que «entre oficiales» se podía negociar una rendición más favorable de la que podía lograr Negrín– y milicianos anarquistas que apoyaban el golpe, dejando en cinco días alrededor de 2.000 muertos. Casado ganó la batalla, pero en vano. En su incesante determinación de erradicar de raíz al enemigo, Franco no ofreció otra cosa que la «rendición incondicional». Solo un mes antes había promulgado una Ley de Responsabilidades Políticas, cuyos efectos, retroactivos hasta el levantamiento asturiano de 1934, se convirtieron en su principal norma represiva. El 28 de marzo, sin ninguna garantía de evitar la sangrienta represión que se avecinaba para los republicanos, el frente de Madrid izó la bandera blanca y las tropas de Franco desfilaron por la capital de la que nunca se habían podido apoderar. Cuatro días más tarde, «después de haber capturado y desarmado al ejército rojo», Franco proclamaba el fin de la guerra.

En un breve epílogo, Casanova analiza las razones de la derrota de la República, citando a numerosos autores españoles y extranjeros que unánimemente la achacan a la situación internacional, una opinión que Casanova comparte en general. El historiador británico especializado en grandes batallas, Anthony Beevor, también citado con cierta profusión, ofrece una lectura diferente: «la desastrosa dirección de la guerra» por parte del Alto Mando de la República y de sus «consejeros soviéticos», que optaron por ofensivas convencionales, generalmente por «razones de propaganda», en contra de un ejército mejor armado y entrenado, fue lo que «gradualmente destruyó el ejército y la resistencia de la República». Esta es una perspectiva en general similar a la que algunos soldados comunistas y ex comunistas supervivientes y comisarios políticos me manifestaron, hace treinta años, sobre sus íntimos pensamientos en el transcurso de la guerra. Añadían dos errores adicionales: el que Negrín no renunciara mucho antes a toda esperanza respecto a las irresolutas democracias; y que el PCE no renunciara a su política sectaria respecto a la izquierda revolucionaria. Sin estas equivocaciones fundamentales, ellos pensaban, hubiera sido posible forjar una estrategia político-militar que respondiera a la pregunta: ¿qué podía hacer la República en condiciones desfavorables –qué fuerzas militares mal utilizadas había disponibles, qué compromisos políticos, qué sacrificios eran necesarios– para ganar la guerra? Vanas ilusiones rumiadas a posteriori, desde luego, pero el coste de la derrota fue ciertamente mayor que el de un innovador intento por evitar esa suerte.

El libro de Casanova debe situarse entre el mejor material escrito sobre la República y la Guerra Civil española disponible en lengua inglesa. Es el producto de una nueva generación de historiadores españoles que alcan-

zaron la mayoría de edad a comienzos de la Transición hacia la democracia después de la muerte de Franco, a partir de la cual el número de obras en español sobre la década de 1930 creció exponencialmente. La mayoría de ellas son estudios regionales o locales, categorías que de ninguna manera hay que despreciar porque sin ellas no es posible ninguna nueva síntesis del periodo. Un ejemplo sobresaliente de un estudio regional es el recientemente publicado *Atles de la Guerra Civil a Catalunya* (2010), con más de 400 mapas detallando cada aspecto político y militar imaginable de la guerra en tierra, mar y aire, en el que durante cinco años ha trabajado un equipo de historiadores y cartógrafos bajo la dirección de Antoni Segura, Joan Villarroya y Víctor Hurtado de la Universidad de Barcelona, un proyecto generosamente financiado por la Generalitat de Catalunya.

En términos de «generaciones» de historiadores españoles, la nacida justamente después de la finalización de la Guerra Civil y que participó activamente en la Transición, también ha producido un destacado trabajo sobre la República y la Guerra. Santos Juliá, sobre todo con su biografía de Manuel Azaña; Ángel Viñas con su trilogía enormemente documentada –en especial con nuevo material procedente de los archivos rusos– sobre la República durante la guerra; y Julio Aróstegui con su larga dedicación a la década de 1930 en España, vienen de inmediato a la mente. La generación de Casanova, de la cual Enrique Moradiellos es otro ejemplo con su obra sobre la Guerra y su ramificaciones internacionales, especialmente británicas, está bien preparada para trascender la estrecha perspectiva histórica de la Península Ibérica –Casanova ha enseñado en dos universidades de Estados Unidos y tiene una cátedra en la Universidad de Zaragoza; Moradiellos ha sido profesor en la London University y es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura– y destaca por su disposición para mirar impasiblemente el reciente pasado español sin que éste pese sobre sus facultades críticas. Además lo hace con estilo y brío.